

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 17º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-33187-2019
CARATULADO : ROJAS/FISCO DE CHILE/CDE

Santiago, veinticuatro de Abril de dos mil veintitrés

VISTOS:

Con fecha 26 de noviembre de 2019, a través de presentación ingresada por oficina judicial virtual, comparece don Mario Armando Cortez Muñoz, abogado, en representación de don **Braulio Patricio Rojas Torroja**, pensionado, cédula de identidad N° 9.842.529-2, ambos domiciliados para estos efectos en calle Carmen N° 602, departamento 2611, comuna de Santiago, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado por doña María Eugenia Manaud Tapia, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago.

Trascriben el relato realizado directamente por don Braulio Patricio Rojas Torroja, quien señala que fue detenido el 6 de julio de 1988 en la vía pública, durante el toque de queda. Indica que con ocasión de ello Carabineros lo registró y golpeó, mientras le gritaban increpándolo de porqué andaba en la calle, profiriendo insultos. La golpiza la realizaron entre 4, tras lo cual lo redujeron en el suelo, pisaron su cabeza y le dijeron que estaba detenido. Después comenzaron a decirle que era terrorista, que mejor lo iban a matar, lo insultaron y golpearon en el suelo. Le dijeron que se levantara mientras los cuatro Carabineros le apuntaban e insultaban, para luego decirle “te vamos a reventar a balazos”. Mientras permanecía apuntado, uno de los funcionarios policiales sacó un revólver y lo lanzó al suelo, cerca de él, indicándole que lo recogiera; él les pedía por favor que no siguiera, que no lo mataran, pero continuaban los gritos instándolo a recoger el arma, pero no lo hacía porque estaba seguro de que iban a matarlo. Cuenta que uno de los Carabineros se enojó y le disparó en una pierna mientras lo insultaban y continuaba la golpiza en grupo por los cuatro funcionarios, pateándolo. Describe que él gritaba de dolor pues la bala le había quebrado el fémur izquierdo; además que producto de las patadas en la cara le rompieron piezas dentales.

Añade que comenzó a desangrarse y él gritaba, en eso uno de los funcionarios le dijo que iban a dejarlo ahí para que muriera, pero decidieron trasladarlo al Hospital Barros Luco, profiriendo amenazas de muerte si él decía lo que había pasado realmente, instruyéndole que dijera que lo habían asaltado. Cuenta que mientras lo atendieron nunca lo dejaron sólo, manteniéndolo esposado a la camilla y prohibiéndole hablar con cualquier persona. El personal de Carabineros le dijo a todos que estaba incomunicado y que era un criminal y terrorista peligroso y que debieron



Foja: 1

dispararle porque andaba colocando bombas y él les había disparado a ellos intentando matarlos.

Fue trasladado al servicio de traumatología del mismo Hospital donde lo sometieron a cirugía, pues el disparo le destrozó parte de la pierna, debido a que eran balas de metralleta disparadas a corta distancia.

Reitera que fue amenazado él y su familia de muerte. Finalmente lo acusaron de poner una bomba en el tendido eléctrico del tren, justificando con ello el accionar de Carabineros, pero nadie le preguntó ni escuchó; recibió muy malos tratos en la Fiscalía, como si fuera un terrorista.

Fue encargado reo por infracción a la Ley de Control de Armas, lo que ameritó la presentación de un recurso de amparo a su favor ante la Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda, causa Rol N° 354-88. Agrega que los escritos de los abogados que integraron su defensa fueron numerosos, de hecho la abogada María Miranda lo fue a visitar cuando se encontraba en el Hospital Barros Luco, donde permaneció un mes incomunicado. En la contestación a la acusación, se rechazaron los medios probatorios, se denunció los malos tratos y apremios, alegándose que no se encontraron armas ni explosivos en su poder, pero eso no importó, el ataque del cual se le acusó, jamás se perpetró y todas las confesiones al respecto fueron obtenidas durante la incomunicación prolongadísima que sufrió. Añade que todas las pruebas, según su defensa, fueron aportadas por Carabineros y la Central Nacional de Inteligencia, motivo por el cual, tras su paso por dependencias de esas instituciones, todos confesaron salieron confesos de los peores crímenes y la causa, finalmente, se redujo a acusarlo de pertenecer a partidos militarmente organizados, pero no existieron pruebas de cualquier delito, puesto que jamás financió, ni perteneció a ningún grupo de combate, ni financiaba grupos armados, pues apenas tenía para vivir. Permaneció detenido en el Hospital de la Penitenciaría y posteriormente fue trasladado a la cárcel pública, quedando en libertad en el año 1990.

Expone que la cárcel fue otro tormento, ya que personal de Gendarmería lo sometió permanentemente a duros castigos, golpizas y humillaciones; lo dejaban sin alimentos y rompían sus cosas, todo por encargo según le decía.

Por último hace presente que fue reconocido como Víctima de Prisión Política y Tortura, por la Comisión Valech.

Tras citar pasajes del Informe Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura relativos al contexto del golpe militar en el año 1973, relatan que la vida de don Braulio Patricio Rojas Torroja, fue violentamente interrumpida, de tal forma que cambió para siempre, interrupción que se caracteriza por hechos tremendamente inhumanos, abusivos y violentos, que lo transformaron en una víctima, en un sobreviviente de los agentes del Estado al servicio de la dictadura cívico militar chilena. Pero lo más grave dice, es que dicho cambio evidentemente no fue voluntario, ya que se debe



Foja: 1

a la interrupción que hace el Estado de Chile en su vida a través de los agentes que financió para tal efecto. Indican que en este caso se trata de crímenes de lesa humanidad.

Señalan que queda de manifiesto que el actuar de los agentes del Estado de Chile, transgredió los límites, irrespetando los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Sostienen que un Estado que se diga Democrático, debe, por ser tal, indemnizar a todo ciudadano que haya sido sometido a los vejámenes físicos y morales que, con ocasión de detenciones ilegales, torturas, prisión política, persecución, y ejecuciones hayan provocado sus agentes, ya que denegar la reparación del daño moral que subsistirá en las víctimas y sus familiares, es obligarlos a seguir soportando el injusto permanentemente.

Bajo el subtítulo “Fundamentos de derecho”, se refieren a la responsabilidad del Estado en nuestro país, su función reparatoria y compensatoria para las víctimas, citando los artículos 6, 7 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República. Agregan que dicha normativa se encuentra complementada por la Ley N° 18.575 sobre bases generales de la Administración del Estado, citando al efecto los artículos 1, 2, 3, 4 y 44 de dicha norma legal, postulando que la responsabilidad del Estado es directa y de derecho público, no siéndole aplicable el estatuto común sobre delitos civiles.

Luego, tras citar doctrina en apoyo de sus argumentos, se abocan al tema de los ilícitos por crímenes de lesa humanidad, conceptualizándolo como los actos inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia. Seguidamente, refieren una serie de instrumentos internacionales sobre el tema y, cita una serie de casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Concluye que, en el caso de autos, nos encontramos frente a un ilícito que constituye un delito de lesa humanidad, por lo cual el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad civil por los padecimientos y dolores irrogados, evadiendo la normativa humanitaria internacional de naturaleza jus cogens.

Luego, alegan la imprescriptibilidad de la acción de reparación deducida, citando jurisprudencia chilena en apoyo de sus argumentos, así como el Caso Órdenes Guerra y Otros con Chile, sentencia del 29 de noviembre de 2018 pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En último término, se refieren al daño moral proveniente de vulneraciones a los derechos fundamentales, indicando que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere prueba. Según la opinión dominante, basta que la víctima



Foja: 1

acredite la lesión de un bien personal para que se infiera el daño. Cita jurisprudencia en apoyo de sus argumentos.

Concluyen que don Braulio Patricio Rojas Torroja, fue víctima de detención ilegal y arbitraria, crueles torturas, apremios físicos y psicológicos crueles, inhumanos y deliberados. Fue víctima de violaciones a sus Derechos Humanos, de persecución y prisión política, todo por agentes del Estado, siendo dañada en sus aspectos más básicos y trascendentes. Todo esto le generó un gran daño en su vida emocional, personal y laboral, las vejaciones de las que fue víctima han hecho que hasta el día de hoy, no pueda llevar una vida normal a pesar de los esfuerzos que ha realizado por ello, toda vez que sigue, sufriendo y siendo atormentado por lo vivido.

Previas citas legales, solicita se tenga por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, acogerla a tramitación y, en definitiva, aceptarla en todas sus partes condenando al demandado a pagar al demandante la suma de \$ 300.000.000.- (trescientos millones de pesos), más intereses, reajustes legales y costas; o, en subsidio, condenar al demandado al pago de las sumas y cantidades de dinero, que estime de justicia y equidad, debidamente reajustadas, con intereses y costas.

Con fecha 24 de diciembre de 2019, se notificó personalmente la demanda a doña María Eugenia Manaud Tapia, en calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado y en representación del Fisco de Chile.

A través de presentación ingresada el 13 de enero de 2020 a folio 7, comparece doña Ruth Israel López, abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien contestó la demanda solicitando su rechazo conforme a los argumentos que expone.

Tras efectuar un resumen de la demanda, opone excepción de reparación integral, improcedencia de la indemnización alegada por haber sido el demandante ya indemnizado. Indica que no resulta posible comprender el régimen jurídico de las reparaciones por infracciones a Derechos Humanos sino se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional.

En efecto continúa, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior -y desde- lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada Justicia Transicional. Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

Agrega que, en efecto, el denominado dilema "justicia versus paz" es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso "nunca más". En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al



Foja: 1

interior de aquel profundo dilema. Por otro lado, manifiesta que no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Mal que mal el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación.

Señala que estos programas incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos y otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de la ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ellas. Asevera que no debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Seguidamente, expone la complejidad reparatoria, citando a Lira, señalando que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno de Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron "(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse".

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación" entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que luego derivaría en la Ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas".

Refiere que en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, el ejecutivo, siguiendo aquel informe, entendió por reparación



Foja: 1

“un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho informe”. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena en un “proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Añade que, de esta forma, en la discusión de la Ley N°19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación moral y patrimonial buscada por el proyecto. La noción de reparación por el dolor de las vidas perdidas es encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal de indemnización y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la responsabilidad extracontractual del Estado. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18. Asumida esta idea reparatoria, señala, la Ley N°19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

En este sentido, indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Mediante estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones permitirá verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

Bajo el subtítulo “Reparación mediante transferencias directas de dinero”, afirma que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Destaca que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, algunos sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero, mientras otros, abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendrían



Foja: 1

efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines resarcitorios.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de: Pensiones: la suma de \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley N°19.123 (Comisión Rettig) y de \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley N°19.992 (Comisión Valech); Bonos: la suma de \$41.856.379.416.- asignada por la Ley N° 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047.- por la ya referida Ley N°19.992; c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123 y bono extraordinario (Ley N° 20.874), la suma de \$21.256.000.000.- Concluye que a diciembre de 2019, el Fisco ha desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-

Manifiesta que, desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que pueda valorizarse para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Indica que el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Agrega que como puede apreciarse, el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, obteniéndose de ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Refiere luego, las reparaciones específicas. Ley N°19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos. Señala que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° 19.234 y 19.992 y sus modificaciones. Indica que la primera de las normas estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la nómina de personas reconocidas como víctimas.

Afirma que se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Añade que adicionalmente, cabe consignar que la actora recibió de forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874 por \$1.000.000.-

Acto seguido, alude a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas. Manifiesta que tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación



Foja: 1

se realiza no sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones.

Hace ver que se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del País. Indica que para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Expresa que además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y con atención exclusiva a beneficiarios del programa. Adicionalmente, detalla otros tipos de beneficios a los beneficiarios y sus familias, en particular en el ámbito educacional y de vivienda.

Luego, expresa que, dentro de las reparaciones simbólicas, es importante que, en los procesos de justicia transicional, que la reparación de los daños se realice mediante actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones, no a través de dinero sino mediante una reparación del dolor y tristeza producidos. Evidencia que parte de ello fue la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago del año 1993, el establecimiento mediante el Decreto N° 121, de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido, construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros.

Bajo el subtítulo “identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas”, sostiene que tanto la indemnización que se solicita en autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, de manera que no procede repararlos nuevamente. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de sus argumentos.

Reclama que dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones provocando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de la reparación.

Concluye que estando la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias que enunció anteriormente, y de acuerdo a los documentos oficiales que dice acompañará a los autos, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la parte demandante.

Acto seguido y subsidiariamente, alega la prescripción extintiva de la acción de conformidad a los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Hace ver que según el relato efectuado por el demandante, la detención ilegal, apremios ilegítimos y torturas que sufrió, ocurrió desde el día 06 de julio de 1988 y hasta su libertad en el año 1990, de manera que entendiendo



Foja: 1

suspendida la prescripción durante el periodo de dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad del propio demandante de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, esto es, el 24 de diciembre de 2019, ha transcurrido en exceso el plazo de 4 años de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332. Luego, en subsidio de lo anterior, opone excepción de prescripción de 5 años de conformidad a los artículos 2514 y 2515 del Código Civil.

Ahondando en los argumentos que sostienen la prescripción invocada, sostiene que la imprescriptibilidad de las acciones es excepcional, requiriendo siempre una declaración explícita, la que en este caso no existe. Añade que las normas de prescripción se aplican a favor y en contra del Estado. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de sus alegaciones.

Por otro lado, expone que los tratados internacionales invocados por el actor, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil, sino únicamente se refieren a la responsabilidad penal, citando jurisprudencia en este sentido.

Finalmente, postula que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, esto es, el artículo 2332 del Código Civil, citando jurisprudencia en apoyo de sus argumentos.

En último término, se refiere al daño e indemnización reclamada, manifestando que, tratándose del daño puramente moral, la finalidad reparatoria no es alcanzable, así como tampoco resulta posible poner a la víctima en el lugar en que se encontraba antes de producirse el daño. Explica que la indemnización del daño moral solo sirve para otorgar a la víctima satisfacción, ayuda o auxilio para atenuar o morigerarlo.

En subsidio de las excepciones anteriores, de reparación y prescripción, solicita que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado (leyes 19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normas pertinentes), y que seguirá percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. Indica que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, hace presente que los reajustes solo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Por otro lado, indica que los intereses se deben solo cuando el deudor ha sido reconvenido y retardado el cumplimiento de la sentencia.



Foja: 1

Por resolución de 20 de febrero de 2020 en folio 13 se tuvo por evacuado el trámite de réplica en rebeldía de la demandante.

Mediante presentación de 26 de enero de 2020 a folio 21, la parte demandada duplicó su contestación, ratificando sus argumentaciones, excepciones y defensas.

Consta que con fecha 02 de marzo de 2020, a folio 15, se recibió la causa a prueba por el término legal, notificándose a la demandante el 28 de julio de 2020, según resolución de folio 21 y a la demandada el 15 de enero de 2021, según aparece a folio 21.

Por resolución de 16 de noviembre de 2021 a folio 31 se dispuso la reactivación del término probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 21.379, resolución que fue notificada al demandado el día 22 de diciembre de 2021.

Con fecha 03 de octubre de 2022, a folio 39, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en estos autos, don Braulio Patricio Rojas Torroja, debidamente representado, deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, todos ya individualizados, a fin de que sea condenado a pagarle la suma de \$300.000.000.- (trescientos millones de pesos) por los daños morales sufridos a consecuencia de los hechos de los que fue víctima, consistentes principalmente en su detención ilegal y arbitraria, apremios ilegítimos y torturas, ocurridos desde el día 06 de julio de 1988 hasta su liberación en el año 1990, cuando fue detenido por personal de Carabineros de Chile mientras se desplazaba por la vía pública en horario de toque de queda, quienes luego de golpearlo brutalmente, proferirle gritos y amenazas, le dispararon con una metralleta en su pierna izquierda, continuando con los golpes, siendo posteriormente trasladado al Hospital Barros Luco, donde fue operado, pero se mantuvieron medidas represivas como esposarlo a la camilla, mantenerlo incomunicado y bajo amenazas de muerte, siendo luego trasladado a la cárcel pública por orden de la Fiscalía Militar de Santiago, quedando en libertad en el año 1990, sin perjuicio que en su paso por dicho lugar fue igualmente sometido a permanente a castigos, golpizas y humillaciones por personal de Gendarmería. Reclama que todo ello, le provocó secuelas físicas y psíquicas, en su vida personal y laboral, cuyas nefastas consecuencias se mantienen hasta el día de hoy.

SEGUNDO: Que por su parte el demandado Fisco Chile contestó y duplicó la demanda, solicitando su rechazo en todas sus partes, oponiendo las excepciones de reparación satisfactiva y la de improcedencia de la indemnización por haber sido ya indemnizado el demandante. Seguidamente, alega la prescripción extintiva de la acción por haber transcurrido en exceso el plazo de 4 años contemplado en el artículo 2332



Foja: 1

del Código Civil cuya aplicación estima procedente, y en subsidio, la prescripción extintiva ordinaria de 5 años, objetando, en subsidio de todo lo anterior, el monto indemnizatorio exigido por la actora a título de daño moral, solicitando que en la regulación de éste se consideren los pagos, pensiones e indemnizaciones que ha recibido la parte demandante.

TERCERO: Que la presente controversia radica en determinar si en la especie concurren los requisitos de la responsabilidad patrimonial del Estado y, en consecuencia, si el Fisco se encuentra obligado a indemnizar el daño moral reclamado por el actor, fundado en la detención ilegal y torturas que experimentó en el contexto político del régimen militar de 1973.

CUARTO: Que la responsabilidad civil tiene por finalidad reparar económicamente a la víctima o con mayor precisión, compensar el daño sufrido por ésta como consecuencia de un hecho ilícito. En este sentido, lo que se busca es proporcionar a la víctima, una cantidad de dinero que le permita sobrellevar de mejor manera el daño sufrido, mediante el goce y disfrute de otras cosas, atendido el carácter transaccional de éste. En razón de ello, se dice que la indemnización monetaria no es una genuina reparación, pues no hace desaparecer el daño ni mucho menos el hecho generador de éste, sino que más bien, otorga los medios económicos a la víctima para que ésta encuentre satisfacción en la adquisición de bienes o servicios.

QUINTO: Que, en lo concerniente a la responsabilidad del Estado y sus órganos, el principio general expresado anteriormente se ha concretizado bajo la institución de la falta de servicio, criterio general de atribución equivalente a la culpa o negligencia que funda la reparación de los daños extracontractuales. De aquí que la doctrina y jurisprudencia, estimen que la responsabilidad civil o patrimonial de los órganos públicos puede ser perseguida, ya sea de acuerdo a las normas de derecho público (Constitución Política de la República, Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, etc.), como a partir de la normativa de derecho privado (arts. 2314 y ss. del Código Civil).

SEXTO: Que en este sentido si bien en la actualidad, es un lugar común hablar de la unidad de responsabilidades públicas y privadas a fin de garantizar reglas y principios equitativos para los particulares que buscan la reparación de sus daños ocasionados por el Estado, ello no conlleva un desconocimiento de las peculiaridades de las relaciones de derecho público (administrativa, legislativa y judicial), en particular, respecto del complejo contenido y finalidad que el órgano estatal persigue con cada una de sus actuaciones.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, la acción civil aquí deducida en contra del Fisco, tendiente a obtener la reparación íntegra de los perjuicios que han sido ocasionados al actor, encuentra también su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los



Foja: 1

Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política de la República.

Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

OCTAVO: Que estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

NOVENO: Que a fin de acreditar lo correspondiente, la parte demandante acompañó los siguientes documentos a la carpeta electrónica: 1) Copia extracto de Norma Técnica del Ministerio de Salud para la atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el Periodo 1973-1990, específicamente el Capítulo II Título II; 2) copia de dos presentaciones intituladas “Características del daño y trauma en los afectos directos de violaciones a los DDHH” y “Transgeneracionalidad del daño”, elaboradas por el psicólogo Freddy Silva G, Coordinador Equipo Especializado PRAIS Servicio de Salud Aconcagua, ambas de fecha 16 de octubre de 2017; 3) copia del Informe de Conferencia internacional, intitulado “Consecuencias de la Tortura en la salud de la población chilena. Desafíos del presente”, del Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, de 21 y 22 de junio de 2001; 4) copia de Informe en términos generales sobre las secuelas dejadas en el plano de salud mental relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, elaborado por Paula Hinojosa Oliveros, psicóloga del Programa PRAIS, de fecha 23 de septiembre de 2016; 5) copia de impresión de pantalla relativa a columna de opinión del psicólogo clínico PRAIS Araucanía Norte Sr. Sergio Beltrán P., denominada “Represión política, daño transgeneracional y el rol del Estado como agente reparador”, publicado el 30 de junio de 2017; 6) copia de documentos intitulados “Algunos Problemas de Salud Mental detectados por Equipo Psicológico-psiquiátrico”, “Algunos factores de daño a la salud mental”, “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico”, “Trabajo social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los



Foja: 1

derechos humanos”, “Salud Mental y Violaciones a los derechos humanos”, “Efectos con la salud física y mental en la población a consecuencia de la represión en las protestas y otras acciones masivas”, del Centro de Documentación de Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago;

7) copia de Estudio de Salud Mental en presos políticos en periodo de transición a la democracia, elaborado por el Equipo de Salud Mental DITT, CODEPU, publicado en el libro “Derechos humanos, Salud Mental, Atención Primaria: Desafío Regional”, Colección Cintras, año 1991; 8) copia de documento intitulado “Significado psicosocial de la tortura y ética y reparación”, elaborado por el Equipo Programa Médico Psiquiátrico, FASIC; 9) copia de artículo “Lo igual y lo distinto en los problemas psicopatológicos ligados a la represión política”, del psiquiatra del CINTRAS Mario Vidal, año 1993; 10) copia de artículo elaborado por E. Lira y María I., Castillo del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos ILAS, “Trauma Político y Memoria Social”, en revista psicología política, N° 6, año 1993; 11) copia de Ponencias denominadas “Tortura y trauma psicosocial”, “Tortura y trauma: El viejo dilema de las taxonomías psiquiátricas”, del médico psiquiatra miembro del Comité del CINTRAS Sr. Carlos Madariaga; 12) copia de capítulo del libro “Psicología y Derechos Humanos”, Barcelona, “Consecuencias psicosociales de la represión política”, de Elizabeth Lira; 13) copia de artículo “Aspectos psicosociales de la represión durante la dictadura”, de la psicóloga del CINTRAS María Teresa Almarza, año 1994; 14) copia de estudio denominado “Las peores cicatrices no siempre son físicas: la tortura psicológica”, elaborado por el Dr. Hernán Reyes, en la International Review of the Red Cross, septiembre de 2007; 15) copia de capítulos III, V y VIII del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; 16) copia de Informe La tortura Modelo de intervención, elaborado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), año 2005; 17) copia de Informe “Víctimas de violaciones de derechos humanos” redactado por los profesionales del Instituto Latinoamericano del Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), de fecha 22 de agosto de 2019; 18) Copia del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; 19) Copia de documento titulado “Minuta legislativa sobre negacionismo” del Instituto Nacional de Derechos Humanos; 20) Copia de extracto de la Nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, realizada por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech I, en que don Braulio Patricio Rojas Torroja , cédula de identidad N° 9.842.529-2, figura con el N° 21.417; 21) Copia de certificado emitido por el Arzobispado de Santiago, Fundación Documentación y Archivo de La Vicaría de la Solidaridad, suscrito por doña María Paz Vergara Low, secretaria ejecutiva el 14 de octubre de 2019; 22) Extracto de informe realizado por Vicaría de la Solidaridad en el que se da cuenta de la detención del demandante. 23) Certificado de



Foja: 1

atención psicológica e Informe Psicológico emitido por la psicóloga Carolina Canales Cortes, respecto del paciente don Braulio Patricio Rojas Torroja.

DÉCIMO: Que, de otro lado, a folio 10 rola oficio del Instituto de Previsión Social, el que informa acerca de los bonos de reparación o beneficios previsionales, asistenciales o de otra índole que -como beneficiario de las Leyes N° 19.992 y N° 20.874- se han otorgado al actor, y que en síntesis consigna que aquel, ha recibido la cantidad de \$26.742.862.- entre marzo de 2005 a diciembre de 2019, más aporte único Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$475.162.-, ascendiendo la pensión actual Valech a \$189.552.-

UNDÉCIMO: Que, si bien la prueba rendida por el actor es profusa, en su mayoría corresponde a informes y estudios genéricos sobre la violación de los derechos humanos, no vinculados específicamente con el demandante Sr. Rojas Torroja, a excepción del informe psicológico reseñado en el numeral 23 y copia del extracto del informe sobre violaciones a los Derechos Humanos de La Vicaria de la Solidaridad con el certificado respectivo, de los numerales 21 y 22 del motivo noveno.

Sin perjuicio de ello, la ocurrencia de los hechos no ha sido controvertida por el Fisco y, por el contrario, puede inferirse a través de otros documentos tales como el listado o nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, realizada por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura en que el Sr. Rojas figura con el N° 21.417, así como de la información remitida por el Instituto de Previsión Social —a pedido del propio demandado Fisco de Chile—, asociado a los beneficios pecuniarios que el actor ha recibido desde el año 2005 a la fecha.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, son hechos establecidos en la causa, al no haber sido controvertidos por la parte demandada y por encontrarse además acreditados con el mérito de la prueba reseñada precedentemente, de conformidad a lo prescrito por los artículos 1700, 1702 y 1706 del Código Civil, que don Braulio Patricio Rojas Torroja, cédula de identidad N° 9.842.529-2, fue calificado como víctima de Prisión Política y Tortura por la Comisión Valech, incluyéndose en la Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados Reconocidos por la Comisión bajo el N° 21.417, recibiendo por ello prestaciones pecuniarias de parte del Estado como se acredita con la información proporcionada por el Instituto de Previsión Social.

Luego, conforme a los antecedentes que obran en la carpeta electrónica, el relato del actor no fue controvertido por la parte demandada, pareciendo además plausible y concordante con las demás probanzas rendidas por aquél, en especial por los documentos emitidos por la Vicaría de la Solidaridad, por lo que se tendrá por cierto que el 06 de julio de 1988 el Sr. Rojas fue sorprendido en la vía pública y en horario de toque de queda, por personal de Carabineros de Chile (quienes informaron que lo sorprendieron colocando un artefacto explosivo en el tendido eléctrico de la



Foja: 1

vía férrea que pasaba por la población José María Caro), quienes luego de propinarle golpes, gritos e insultos entre los 4 funcionarios, le dispararon en la pierna izquierda fracturando el fémur. Estos mismos funcionarios lo trasladaron a la denominada Posta del Hospital Barros Luco, en calidad de detenido e incomunicado, manteniéndolo con restricciones tales como esposas en la camilla, vigilancia permanente y amenazas de muerte. Posteriormente fue trasladado al servicio de Traumatología, para quedar finalmente a disposición de la Segunda Fiscalía Militar en la causa Rol 1154-88, quien lo encargó reo por infracción a los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Control de Armas, permaneciendo detenido en la cárcel pública hasta su libertad en el año 1990.

Respecto de los vejámenes que alega haber recibido en el recinto penitenciario, no se rindió prueba.

DÉCIMO TERCERO: Que en relación al primer supuesto, esto es, la existencia de un hecho antijurídico, conforme a la naturaleza de la materia y hechos sobre los que versa la litis, cabe consignar que del mérito de las probanzas reseñadas en los motivos anteriores, ha quedado acreditado en autos, que efectivamente el actor Sr. Rojas Torroja fue víctima de detención ilegal cuando el día 06 de julio de 1988 transitaba en horario de toque de queda, momento en el que 4 Carabineros procedieron a darle golpes, gritos e insultos, pegándole en el suelo y después apuntando sus armas, para finalmente recibir un impacto de bala en su pierna izquierda, lo que provocó una fractura de fémur; que fue trasladado por esos mismos a la Posta del Hospital Barros Luco, en calidad de detenido e incomunicado, y luego puesto a disposición de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago en la causa Rol 1154-88, acusado de infracción a los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Control de Armas y trasladado a la cárcel pública, donde permaneció hasta el año 1990, sin indicar en qué fecha específica ocurrió.

DÉCIMO CUARTO: Que las conductas descritas claramente constituyen actos ilegales, y aun arbitrarios porque no fueron justificados ni aun en el contexto político y social de la época, que afectan lo más esencial de los seres humanos, como la vida, integridad física, libertad y dignidad y que por su extensión y alcance trascienden al propio individuo, afectando a la humanidad toda, y por tanto se encuadran en el concepto de delito de lesa humanidad.

DÉCIMO QUINTO: Que, en efecto, consta en la documental ofrecida, que el actor fue reconocido como víctima de violaciones a los derechos humanos como consta en los registros de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura bajo el N° 21.417 (Valech 1), así como el documento emitido por el Instituto de Previsión Social relativo a los beneficios pecuniarios recibidos por el Sr. Rojas desde el año 2005, circunstancias que no fueron controvertidas por el Fisco y por el contrario, fueron corroboradas a través de su relato, antecedentes que constituyen



Foja: 1

prueba irrefutable de lo que se reclama en autos, y que permiten a esta juez tener por probada la existencia de los hechos antijurídicos que se invocan.

DÉCIMO SEXTO: Que enseguida, los perjuicios que el actor alega haber padecido aparecen como consecuencia natural y lógica de todo lo vivido, el hecho de haber sido sometido a golpes, insultos y la amenaza de muerte cuando entre varios funcionarios de Carabineros lo apuntaron con sus armas de fuego, para posteriormente recibir un impacto balístico en su pierna izquierda, lo que le provocó una fractura de fémur, siendo trasladado a la Posta del Hospital Barros Luco en calidad de detenido e incomunicado, bajo la vigilancia permanente de personal policial, y posteriormente encargado reo en la causa Rol N° 1154-88 de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, y permaneciendo tenido en la cárcel pública hasta el año 1990, hechos que indudablemente afectan la vida de cualquier persona, provocando entre otras cosas, trabas para la estabilidad emocional, familiar y social, circunstancias acreditadas por los antecedentes tenidos a la vista, en particular el Informe Psicológico expedido por la psicóloga Carolina Canales Cortés, que en síntesis consigna que el demandante, presenta trastorno de estrés post traumático de carácter extremo, crónico y grave, al re experimentar el trauma, pues tiene recuerdos que intervienen en su vida cotidiana, depresión con episodios de desánimo, frustración y sentimientos de culpa y psicosis con cuadros de delirio de persecución. Además presenta trastorno de ansiedad y pánico.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que habiéndose acreditado la existencia del hecho dañoso que se reclama de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde pronunciarse sobre las defensas de la demandada.

DÉCIMO OCTAVO: Que en torno a la excepción de *prescripción extintiva* de la acción, incoada plateada por la demandada, huelga tener presente que el hecho que motiva esta acción, es de aquellos que la doctrina y tribunales superiores de justicia reconoce como graves crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establece los Convenios de Ginebra del año 1949, toda vez que estos hechos y especialmente los descritos en el motivo 12° ocurrieron en un contexto de excepción a nuestra democracia, período en que se vulneraron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o a simples civiles que no adherían a ningún movimiento político, con el único fin posible de amedrentar al resto de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.

DÉCIMO NOVENO: Que cabe precisar que la acción indemnizatoria que se deduce se encuentra sustentada en las torturas acreditadas que ha sufrido el actor por el Estado Chileno con enorme poder de coerción y uso de fuerza, vulnerándose con aquello lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma última que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a



Foja: 1

tratos crueles inhumanos o degradantes que así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a índole humanitaria proveniente de los derechos de todos ser humano reconocidos en el tratado internacional indicado, que prima de acuerdo a las normas de derecho interno en específico al artículo 2497 del Código Civil.

VIGÉSIMO: Que por otro lado sustenta la tesis de inaplicabilidad de la norma del Código Civil antes mencionada por el artículo 2° de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5° de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que en efecto, ya la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, por lo que resultaría incoherente entender que la acción de reparación está sujeta a normas de prescripción, puesto que ello atenta los principios del Derecho Internacional que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, numerando quinto, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en especial su capítulo segundo; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que dado que los Derechos Humanos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

VIGÉSIMO TERCERO: Que sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

Por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca en su artículo 4° la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es los de lesa humanidad no conlleva



Foja: 1

necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7.

VIGÉSIMO CUARTO: Que de otro lado, debe tenerse presente que no nos encontramos frente a una acción de indemnización de perjuicios “común” que derive de relaciones contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que como se dijo, nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el *ius cogens*, propias del Derecho Internacional; así y de acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, es así que habiendo ratificado Chile la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma, que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.

VIGÉSIMO QUINTO: Que por otra parte el artículo 2332 del Código Civil señala que: “*las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto*”; el artículo 2514 señala que: “*la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible*”; finalmente el artículo 2515 de igual cuerpo legal señala que el tiempo es de 5 años para las acciones ordinarias.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, en ese contexto, el estatuto del derecho privado chileno regula relaciones entre particulares, regidas por los principios de la autonomía de la voluntad y en plano de igualdad, cuestión inaplicable al caso *sub lite*, donde se busca regular y sancionar en el ámbito de derecho público, relaciones verticales del Estado con los particulares, determinando las responsabilidades que éste tenga por las afectaciones de derechos por parte de sus agentes.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que resulta inconcuso que tratándose del resarcimiento de las transgresiones a los Derechos Humanos, la fuente de responsabilidad civil o el estatuto aplicable, no puede encontrarse en nuestro Código Civil, toda vez que las normas de regulación y protección de tales derechos son posteriores a nuestra codificación, y las ahí contenidas no fueron concebidas por Bello para la solución de problemas contemporáneos, como el de marras, para los cuáles ha devenido el desarrollo de nuevas concepciones al amparo del Derecho Internacional, el que incorporado en



Foja: 1

virtud del artículo 5° de nuestra Constitución Política, resulta absolutamente vinculante y obligatorio.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que así, en el caso *sub lite*, la detención y abusos propinados al actor, sumado al hecho de haber recibido una herida de bala en su pierna izquierda, constituyen en el hecho actividades ilegítimas llevadas a cabo al margen de la juridicidad y constitucionalidad, por ende, se trata de un crimen de lesa humanidad, que de acuerdo al Derecho Internacional a través de normas de *Ius Cogens*, del Derecho Consuetudinario y Derecho Convencional donde se ha declarado su imprescriptibilidad, sin distinción alguna de si ello alude a las acciones penales y civiles, sin que pueda estimarse dicha omisión como suficiente para interpretar dicho cuerpo normativo en contra de sus beneficiarios naturales, lo que no sería sino contrariar su historia fidedigna.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, en efecto, el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que cuando haya violación de un derecho o libertad habrá derecho al pago de una justa indemnización a la parte lesionada, y el artículo 1.1 trata de las obligaciones de respeto y garantía por parte de los Estados partes de las disposiciones contenidas en tal pacto, relativas al respeto y protección de derechos fundamentales.

TRIGÉSIMO: Que así no resulta posible aplicar las normas del Código Civil y declarar prescritas acciones indemnizatorias ordinarias emanadas de violaciones a derechos fundamentales, por ser contrarias al orden jurídico internacional, que traducido en Convenios y Tratados y por clara disposición constitucional, son vinculantes para Chile, como ha reconocido y declarado abundante jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, entre otros, en el homicidio de Fernando Vergara, los denominados caso Liguña, Caravana de la Muerte -capítulo San Javier-, Secuestro y Desaparición de Darío Miranda Godoy y Jorge Solovera Gallardo y secuestro y desaparición de Sergio Tormen Méndez.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República establecen los principios de igualdad ante la ley de gobernantes y gobernados, siendo responsables tanto de sus acciones como de sus omisiones, asimismo el artículo 4° de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, señala que éste será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado, normas que en conjunto con los tratados internacionales vigentes en Chile, reafirman el deber de responder y resarcir los daños, normas que carecerían de toda validez y operatividad de aplicarse las reglas y plazos del derecho común a materias de tan alto dolor y conocimiento público, como son las violaciones a los Derechos Humanos.



Foja: 1

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, por lo señalado precedentemente, esta sentenciadora estima que los cómputos de los plazos establecidos en los artículos 2332 y 2515 no son aplicables en la especie, entran en directa contradicción con normas internacionales, normas de *Ius Cogens*, el Derecho Consuetudinario y el Derecho Constitucional, desechándose así la prescripción invocada por la demandada.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que seguidamente, en lo tocante a la defensa de la demandada invocada como excepción de “*reparación satisfactiva*”, cabe señalar que de acuerdo a la información remitida por el Instituto de Previsión Social, el demandante ha recibido beneficios pecuniarios por parte del Estado por el hecho de haber sido calificado como víctima de violaciones a los derechos humanos, percibiendo la suma de \$26.742.862.- entre febrero de 2005 a noviembre de 2019, más bono Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$475.162.-, ascendiendo la pensión actual Valech a \$189.552.-

Sobre este punto, huelga precisar al respecto que la Ley 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala, dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios a través de los cuales el Estado Chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una supuesta incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, en este sentido, el propio artículo 4° de la citada ley dispone que: “*en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales*”, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

En consecuencia, se concluye que aun cuando el actor es beneficiario, las mencionadas leyes en parte alguna establecieron una incompatibilidad entre los beneficios que otorga y las indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que asimismo, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral, en consecuencia, los beneficios establecidos en las Leyes números 19.123, 19.992 y 19.980 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, cuya cuantía y para el caso que sea procedente será determinada en este juicio.



Foja: 1

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, en consecuencia, la acción de indemnización por daño moral impetrada, en caso alguno resulta incompatible con los beneficios que ha recibido el actor, a cualquier título y en cualquier momento, de manera tal que se rechazará la excepción alegada de reparación satisfactiva, sin perjuicio de considerarse estos al momento de cuantificar la indemnización por daño moral, como se dirá.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, así las cosas, desechadas que fueren las defensas fiscales, y establecida la existencia del ilícito y su relación causal con los daños y perjuicios invocados, y a la luz del informe psicológico emitido por la psicóloga Carolina Canales Cortés, que en síntesis consigna que el Sr. Rojas Torroja *“[...] presenta trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, la que deriva en Estrés Post Traumático de carácter crónico y grave [...] En síntesis Don Braulio Patricio Rojas Torroja, presenta daños y secuelas psicológicas, alteraciones en su salud mental, producto de los acontecimientos que debió enfrentar como víctima de prisión política y tortura, durante la dictadura militar, periodo 1973 a 1990. Se le detecta depresión y psicosis con cuadros de delirio de persecución, por lo que no cabe sino dar lugar a la acción indemnizatoria solicitada por el actor.*

Que para la determinación del quantum indemnizatorio, conforme a la prueba idónea rendida por la demandante, por estimar fundadamente que los hechos que vivenció, la detención y privación de libertad acusado de un ilícito sin mayores antecedentes, conllevan gran dolor y aflicción para todo ser humano, no sólo en lo físico inmediato que se vio reflejado en el impacto balístico, golpes y torturas que como es de público conocimiento fueron sometidos los prisioneros políticos, sino que además un estado de vulnerabilidad interna que eterniza los sufrimientos e impide un normal desarrollo en su vida adulta posterior, que difícilmente puede repararse, por lo que esta sentenciadora estima fijar prudencialmente en la cantidad de \$15.000.000.- (quince millones de pesos) que por vía de compensación satisfactiva pueda propender a resarcir lo descrito.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, tal como se dijo con anterioridad, de acuerdo al documento acompañado a los autos emitido por el Instituto de Previsión Social, don Braulio Patricio Rojas Torroja ha recibido la suma de \$28.218.024.-, ascendiendo la pensión actual Valech a \$189.552.-, dineros que si bien no constituyen una reparación integral como pretendía la demandada, dicho antecedente ha sido considerado por esta sentenciadora al momento de cuantificar el daño moral sufrido por el demandante.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran lo resuelto precedentemente.

CUADRAGÉSIMO: Que, atendido el carácter declarativo del proceso, la suma ordenada pagar sólo devengará intereses y reajustes, una vez que se encuentre firme o ejecutoriada y hasta su pago efectivo.



Foja: 1

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que atendido el mérito de lo razonado anteriormente y el hecho que la demandada no controvertió sustancialmente los hechos, cada parte pagará sus costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 160, 170, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332 y 2497 del Código Civil; Ley N° 19.992, ley N° 19.123; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:

I.- Que se **rechazan** las excepciones de reparación del daño y de prescripción deducidas por la demandada;

II.- Que se **acoge parcialmente** la demanda de fecha 26 de noviembre de 2019, debiendo el Fisco pagar la suma de \$15.000.000.- (quince millones de pesos) al demandante don Braulio Patricio Rojas Torroja, cédula de identidad 9.842.529-2, por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral;

III. – Que la suma ordenada pagar devengará reajustes e intereses desde que el presente fallo quede ejecutoriado y hasta su pago efectivo.

IV.- Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese, consúltese sino se apelaré.

DICTADA POR DOÑA ROCIO PÉREZ GAMBOA, JUEZ TITULAR.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinticuatro de Abril de dos mil veintitrés**



